

EL SOCIALISTA

271

Centroamericano



Segunda Quincena
Septiembre 2018

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00
El Salvador: US\$ 0.60
Nicaragua: C\$ 10.00
Costa Rica: ₡ 500.00

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana”

www.elsoca.org

www.facebook.com/elsoca.org

www.twitter.com/elsocca

COSTA RICA.- ¡ABAJO EL “COMBO FISCAL”! : ¡QUE RENUNCIE CARLOS ALVARADO Y SU GOBIERNO!



**ADELANTE CON LA HUELGA INDEFINIDA:
!LAS NEGOCIACIONES DEBEN SER PÚBLICAS!
!EXTENDER LA HUELGA GENERAL AL SECTOR PRIVADO!**

GUATEMALA.- ¡UNIDAD DE ACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES: POR LA RENUNCIA DE JIMMY MORALES Y SU GOBIERNO!



GUATEMALA.- Estudiantes de la USAC se movilizan contra el gobierno de Morales



HONDURAS.- Movilizaciones, continuismo e impunidad en caso Berta Cáceres



NICARAGUA.- Ortega presiona y los empresarios reculan

CENTROAMÉRICA: AUGE LUCHAS DEMOCRÁTICAS Y DE LOS TRABAJADORES

El orden imperialista que fue restablecido en Centroamérica después de la firma de Esquipulas II en 1987, que condujo a la derrota de la revolución nicaragüense en 1990, y a las posteriores derrotas de las guerrillas en El Salvador en 1992 y en Guatemala en 1996, parece haber llegado a su fin casi 30 años después de una demoledora ofensiva neoliberal.

La democracia y la prosperidad anunciadas nunca llegaron. Al contrario, los pequeños países de Centroamérica retrocedieron en sus niveles de industrialización, aumentó considerablemente en el desempleo y con ello la masiva inmigración hacia Estados Unidos.

El surgimiento del fenómeno de las maras o pandillas no es más que la expresión de la descomposición social, producto de la crisis económica y de la derrota de la revolución en Centroamérica durante la década de los años 80.

El llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) es una zona geográfica donde predomina la pobreza, la marginación social, la violencia, la corrupción enquistada en los Estados, un verdadero reino para el crimen organizado.

No obstante, comienzan a surgir nuevos y alentadores fenómenos sociales: en casi todos los países de Centroamérica se producen luchas democráticas, con mayor o menor intensidad, y también luchas propias de los trabajadores, quienes pelean por defender sus conquistas laborales y sociales.

En Nicaragua se continúa librando una sangrienta lucha por la democratización, contra una dictadura dinástica que ha copiado lo peor de la dictadura somocista. Pese a la represión y las masacres continuas, la lucha continua, aunque su desenlace no está claro.

En Guatemala la lucha contra la corrupción ha adquirido ribetes de abierta confrontación entre sectores burgueses, pero lo más importante de esta situación, que no es nueva, es que las masas pasan a la lucha contra el gobierno de Jimmy Morales. Los empresarios del CACIF han olido el peligro, y por eso no actúan de la misma manera que el año 2015, cuando se movilizaron contra el gobierno de Otto Pérez Molina.

Evidentemente, en esta lucha democrática, el sector de la burguesía que dice luchar contra la corrupción, trabaja por construir su propia alternativa de poder, montándose sobre el movimiento de masas para construir su propia alternativa electoral de recambio. Corresponderá a los trabajadores y los sectores estudiantiles conscientes construir una alternativa independiente, que represente los intereses y las aspiraciones de los trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores populares.

La lucha en Costa Rica, tiene una connotación diferente: son los sindicatos de trabajadores del sector público quienes encabezan la lucha contra el plan de ajuste, conocido como "Combo Fiscal". La huelga general indefinida del sector público ya se lleva tres semanas y la lucha se mantiene firme. Existen bloqueos de carreteras, y una amplia participación de sectores populares.

A pesar del empuje vigoroso de la lucha contra el Combo Fiscal, la pelea todavía no está ganada. Una parte importante del país está paralizada, pero no todo. Es importante extender la Huelga General al sector privado, en donde no existen sindicatos, pero este es el momento para comenzar a construirlos. El día que los trabajadores del sector privado se unan a las luchas de los trabajadores públicos, no habrá gobierno que resista.

Las dirigencias de la Unión Sindical Nacional, coalición de sindicatos y centrales sindicales, debe mantenerse unida y en consulta permanente con sus bases, y nunca tomar decisiones que contraríen la voluntad de la mayoría.

La derrota del Combo Fiscal está ligada a la exigencia de la renuncia del gobierno de Carlos Alvarado, quien ha traicionado el mandato de sus electores. El problema histórico del endeudamiento del Estado costarricense debe ser resuelto por las masas populares de ese país, las que exigen la aprobación de una reforma fiscal que haga que las grandes empresas paguen más impuestos, conforme sus ganancias. ■

EL SOCIALISTA
Centroamericano

ESCA No. 271
Segunda Quincena
Septiembre 2018

Impresión:
26 Septiembre 2018

DIRECTOR:

Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:

Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Alberto Castro,
Melchor Benavente,
Eduardo Villalobos,

José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS

www.elsoca.org

facebook.com/elsoca.org

twitter.com/elsoca

Redacción:

elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:

psoca@elsoca.org

Secciones:

psoca_guatemala@elsoca.org

psoca_salvador@elsoca.org

psoca_honduras@elsoca.org

psoca_nicaragua@elsoca.org

psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
es una publicación del
PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA).

fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del **PSOCA**, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



ESPONTANEIDAD Y PROTESTA SOCIAL: EXPERIENCIAS CONTRA LAS DICTADURAS DE CARIAS Y DE JOH

Por Felipe Suazo Amaya

El año 1933 marcó el inicio de una de las dictaduras más crueles, encabezadas por el Partido Nacional, la que duro exactamente 23 años: Tiburcio Carías Andino (1933-49), Juan Manuel Gálvez (1949-54) y Julio Lozano Díaz (1954-56). Esta dictadura se generó, entre otros factores, por la división del Partido Liberal (PL), surgido en 1891, en varias facciones de distintos caudillos. El PL entró en una gran crisis en 1932, como ya le había sucedido en 1924. De la primera crisis del PL surgió el Partido Nacional (PN) entre 1923-24, llamado por sus adversarios el PL y sectores beligerantes como el partido conservador de Honduras.

Dos grandes dictaduras

La historia parece repetirse con otros matices. De la segunda crisis, la actual, surgió la dictadura perfecta del PN. En el año 2009, el liberalismo nuevamente se dividió, cuando un sector del PL encabezó el golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya. El resultado fue nuevamente la llegada al poder del PN en el año 2010, con Porfirio Lobo. De esta crisis del liberalismo a principios del siglo XXI, el saldo ha sido la consolidación de una nueva dictadura encabezada por el PN (una situación similar a la del siglo XX con Carías), y el surgimiento de un nuevo partido liberal: Libertad y Refundación (LIBRE).

En el año 2009, al calor de la lucha contra el golpe Estado, surgió el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el cual levanto muchas expectativas al conformarse como una plataforma beligerante del movimiento social hondureño, pero este fue castrado al convertirse en la base social del nuevo partido político: LIBRE. El resultado fue el abandono de la lucha social por una lucha electoral. Pero, valga la redundancia, en sus inicios como partido, LIBRE se catapultó como un partido anti tradicional, anti oligárquico, lanzando la propuesta de organización de Comités de Base a nivel nacional, pero dicho plan jamás fue concretizado.

Protesta social espontanea

Desde el año 2013, las elites se unieron para dar un zarpazo a la propuesta de LIBRE. Desde el 2009 al 2018, Honduras ha permeado una protesta social continua sin organización. Es decir, una protesta social, nacida de la espontaneidad. Tanto LIBRE, el FNRP, y la izquierda hondureña tradicional –dividida aun en tontas rivalidades del pasado– han sido incapaces, para llevar al pueblo a una organización de base, para hacerle



frente a la dictadura del siglo XXI, encabezada por el Partido Nacional.

Cuando estalló la huelga bananera de 1954, había un movimiento clandestino organizado, que tendrá su primera trinchera en la protesta social más importante de Honduras en el siglo XX. Los comunistas e intelectuales del Partido Democrático Revolucionario Hondureño (PDRH) llevaron a cabo una protesta social, que dejó sin argumentos a los grupos del poder.

En la actualidad, LIBRE tiene las mismas características que el PDRH, un partido definido por los académicos como policlasista. Sin embargo, esta fastidiado por una cúpula anti democrática, que no le ha dado énfasis a la organización compacta, a la protesta organizada. En momentos en que el pueblo ha sobrepasado la protesta social, como las recientes movilizaciones de noviembre, diciembre del 2017 y enero del 2018, la dirigencia de LIBRE ha llamado a la calma, en momentos en que los niveles de confrontación han dejado la economía paralizada. Los empresarios privados agrupados en el COHEP quedaron aterrorizados con la magnitud de la protesta social.

Retomar el ejemplo de 1954

Durante la Huelga General de 1954 el tradicionalismo se vio en peligro. En los años 2013 y 2017 también. Las protestas sociales están alcanzado un punto álgido, a pesar de la existencia de una gran dictadura. En 1954 la protesta fue producto de la organización. En 2009, 2013, 2017, la protesta social ha surgido de la espontaneidad.

Hacemos un llamado a los verdaderos revolucionarios a enfrentar la dictadura nacionalista del siglo XXI, con Juan Orlando Hernández (JOH) a la cabeza, con más organización. La respuesta de las elites ha sido sacar de la manga a otro actor histórico: los militares. La Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Agencia Técnica para la Investigación Criminal (ATIC) y la vieja Policía Nacional, se han convertido en los principales actores de la represión en Honduras. Este brazo armado del Estado, está asesinando estudiantes, ambientalistas, dirigentes de base, etc. Todo esto ha ocurrido frente a la soñolienta dinámica de la dirigencia de LIBRE, el FNRP, y de la izquierda históricamente sectaria.

¿Qué se nos viene?

Los rumores hablan de un enfrentamiento electoral entre dos caudillos: Mel Zelaya y JOH. El PN se esfuerza en construir una dictadura de largo alcance, como la del siglo XX. Si persiste la desorganización popular, no sabemos cuánto tiempo puede durar la dictadura nacionalista. Lo cierto es que, si la oposición no deja de lado el infantilismo electoral, y continua la espontaneidad en la protesta social, se avizora otro gran fracaso. La desorganización es tremenda en Honduras. El magisterio organizado está de rodillas. Las centrales obreras se han convertido en patronales a gusto del modelo neoliberal. La izquierda hondureña le juega a la revolución de maletín ¿Qué hacer? Se preguntaría el viejo Lenin. Lo primero es encauzar la lucha, un llamado continuo de este espacio. ¿Cómo? A través de la organización en tiempos de desorganización de la protesta espontánea. ■



¡UNIDAD DE ACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES: POR LA RENUNCIA DE JIMMY MORALES Y SU GOBIERNO!

Por Armando Tezucun

El domingo 16 de septiembre la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió, por unanimidad, un amparo provisional que permitirá el retorno al país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. Esto deja sin efecto la resolución del 4 de septiembre, en que el presidente Jimmy Morales, a instancias del Consejo de Seguridad, decidió impedir el ingreso al país de Velásquez, quien se encuentra en Washington en viaje de trabajo.

El gobierno desacata a la CC

Como era de esperarse, el gobierno desconoció la decisión de la CC. En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación Enrique Degenhart, la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel y el Procurador General de la Nación José Luis Donado, reiteraron que no se permitirá el ingreso del comisionado Velásquez al país, expresando su propia interpretación de la resolución de los magistrados, y del convenio firmado entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU) en cuanto a la conformación de la CICIG y el nombramiento de su jefe. El ministro Degenhart dijo: "El ciudadano colombiano, Iván Velásquez Gómez no ingresará al país...Se permitirá el ingreso del comisionado que sea electo, luego de un proceso de negociación armonioso entre las partes y se resuelva las controversias" (El Periódico 18/09/18). El gobierno de Jimmy Morales llegó al extremo de, según anunció la ministra Jovel, enviar una nota a la ONU para que en un plazo de 48 horas envíe un listado de cuatro candidatos para nombrar un nuevo comisionado o comisionada, a quien sí se permitirá ingresar a Guatemala; la nota fue amenazante, pues solicita

al Secretario General de la ONU que "cumpla con su función de facilitador en la resolución de los requerimientos de los Estados miembros, caso contrario le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de una nueva comisionada o comisionado, en los términos y plazos que se han solicitado" (La Hora 17/09/18).

Respondiendo a una solicitud de aclaración, el 18 de septiembre la CC confirmó que el jefe de la CICIG, Iván Velásquez puede ingresar al país; la corte ordenó al "presidente de la República Jimmy Morales, el ministro de Gobernación Enrique Degenhart, funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) y de Migración, abstenerse de emitir u obedecer órdenes que impidan el ingreso a territorio nacional al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)." (El Periódico 19/09/18). En otra parte de la declaración se menciona específicamente el nombre de Velásquez.

Por otro lado, en respuesta a la carta conminatoria de la canciller Sandra Jovel, la ONU confirmó a Velásquez como jefe de la CICIG. La respuesta dice "El Secretario General -António Guterres- no ve ningún motivo para cambiar su posición actual de apoyo al Comisionado Iván Velásquez...La CICIG ha sido considerada ampliamente exitosa en su apoyo a los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y fortalecer las instituciones nacionales encargadas de investigar y enjuiciar crímenes dentro de su mandato" (El Periódico 19/09/18). El gobierno de Jimmy Morales avanza lentamente hacia una ruptura del orden constitucional, siguiendo los pasos del Jorge Serrano Elías en 1993, al desafiar las decisiones de la CC interpretándolas a su manera. Al recibir la notificación de la última aclaración

de la CC, respondió, una nota breve, ambiguamente que "...hará uso de las facultades y recursos que la ley otorga para defender la Constitución", y la vez insta al Secretario General Guterres a encontrar una solución por medio del diálogo (Prensa Libre 22/09/18).

Los grupos de poder detrás del gobierno de Morales

Morales y su partido, el Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), después de las elecciones de 2015, se han inclinado hacia los intereses de uno de los tres grandes grupos de poder que controlan las riquezas y la política en Guatemala. Este es el bloque de militares que desde 1954 fueron acumulando recursos y la supremacía política, primero a través de los gobiernos militares que aplicaron las políticas criminales de contrainsurgencia, y después de la firma de los acuerdos de paz, a través de grupos situados en la sombra, de militares retirados que se enriquecen a través de toda suerte de negocios lícitos e ilícitos, y del tráfico de influencias en el aparato estatal. Jimmy Morales y el FCN, terminaron aliándose a estos grupos militares, e incorporando a su bancada en el Congreso a diputados sobrevivientes de los partidos vinculados al defenestrado gobierno de Pérez Molina. La tenaz oposición de Morales y sus diputados aliados a la CICIG y a Velásquez no significa otra cosa que la defensa obstinada de una forma corrupta de hacer gobierno y de manejar los recursos del Estado.

¿Hacia una solución negociada?

Los intereses y las fuerzas en 2018 no son los mismos que en 2015 condujeron a la defenestración de Pérez Molina y su gobierno. Después de dos años de desaceleración de la economía, los diferentes grupos de la oligarquía tradicional no están



dispuestos a adversar al gobierno y a los grupos de exmilitares corruptos detrás de él, sobre todo después de que empresarios de sus propias filas han resultado involucrados en actos de corrupción y de financiamiento electoral ilícito. El director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, al referirse al desacato del gobierno al fallo de la CC del 16 de septiembre, dijo "Ellos tendrán sus razones, nosotros no nos hemos metido a analizar profundamente, lo que menos queremos es que sea una confrontación entre dos bandos, entre situaciones o entre personas, es lo peor que le podría pasar al país. Aquí nosotros necesitamos generar condiciones para sacar al país adelante en un momento que de verdad lo necesita" (La Hora 19/09/18).

Por el lado de los Estados Unidos y la ONU, lo que se está perfilando es una salida negociada al conflicto gobierno-CICIG. A instancia de senadores y congresistas estadounidenses, la propuesta, que fue aceptada por el Secretario Guterres, es que se cree la figura de un comisionado, que asuma en ausencia del titular de la CICIG, y que se cree también un sistema de control y transparencia para los fondos recibidos por la CICIG de parte de los países donantes. El Secretario de Estado Mike Pompeo ya hizo esta sugerencia vía telefónica al presidente Morales.

El 20 de septiembre Guterres reconoció que hay un interés de la ONU en negociar con el gobierno "Esperamos que en consultas con el Gobierno sea posible encontrar un asunto para coordinar la acción a lo interior del país y, naturalmente, en el contexto de los contactos regulares con Guatemala, hay una negociación prevista en el tratado, es lo mismo. Estamos interesados en proseguir esa negociación visando el

perfeccionamiento de la acción de la comisión" (Prensa Libre 21/09/18).

Como vemos, hay fuerzas que están procurando salvar al régimen negociando y llegando a acuerdos con el gobierno de Jimmy Morales, aun cuando éste ha dado muestras de endurecer las medidas represivas, asesinando líderes indígenas y campesinos, y reforzando los controles de la policía y el ejército en las ciudades.

Un plan de acción para las movilizaciones populares

Por otro lado, la ausencia de las capas medias urbanas acomodadas



en las protestas, reflejo de la actitud conciliadora del empresariado, ha conducido a que las organizaciones populares asuman la dirección de las movilizaciones. Las multitudinarias marchas y protestas del 20 de septiembre, en al menos siete departamentos del país, han sido ejemplo de unidad en la acción de los grupos campesinos, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres, jóvenes, de la diversidad sexual, etc. Al llegar la marcha de cerca de 15 mil personas a la Plaza Central de la capital, oradores pasaron a la tribuna a denunciar al gobierno, contrario a las concentraciones de 2015, donde las capas medias explícitamente se negaban a que hubiera discursos.

Pero todavía falta claridad política en el movimiento popular. Las posturas que se limitan a defender a la CICIG

y a Iván Velásquez, que opinan que el principal problema en Guatemala es la corrupción, que defienden el orden constitucional y el Estado de Derecho contra el desacato del gobierno a las decisiones de la CC, se limitan a defender el régimen político, exigiendo la salida de Morales y sus funcionarios sin exigir cambios de fondo que beneficien a los oprimidos y explotados.

En primer lugar, debemos defender, no el andamiaje legal del Estado burgués, con la CC a la cabeza, ni la legalidad dentro de los cánones actuales de la constitución. Esos son puros formalismos que durante décadas han servido para garantizar la explotación de las riquezas y los recursos del país de parte de las oligarquías que controlan el poder. Debemos defender las libertades democráticas que están siendo amenazadas por el gobierno de Jimmy Morales; para las clases populares la ruptura del orden constitucional significa eso: un ataque a la libertad de organización, de expresión, de manifestación, de circulación, de sindicalización, etc.

Por otro lado, debemos actuar con un plan unitario de acción, que parta de que el principal problema en Guatemala no es la corrupción, sino las estructuras de opresión y explotación que han perdurado por décadas; que la verdadera democracia solo la alcanzaremos cuando los campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, mujeres, etc., tengamos pleno acceso a servicios de salud y de educación de calidad, a servicios de vivienda, a empleo decente, a salarios dignos, al respeto de los derechos ancestrales de los pueblos, etc. Hacia estos planteamientos debemos orientar nuestras luchas. ■



ORTEGA AMENAZA Y LOS EMPRESARIOS RECULAN: ¿UNA “CONCERTACIÓN NACIONAL” IMPOSIBLE?

*Por Sebastián Chavarría
Domínguez*

Hace algunas semanas, advertimos que con la destrucción de los tranques y barricadas, a mediados de julio del año 2018, se iniciaba una fase de retroceso de la lucha popular, y probablemente se abriría otra fase de “negociaciones y traiciones”. Parece que ya entramos en esta última.

Afortunadamente, a pesar de las incesantes masacres el retroceso no fue total. La resistencia se mantuvo en las calles, las marchas continuaron. Algunas fueron multitudinarias a pesar de las continuas redadas contra los activistas populares.

Brutal ofensiva represiva contra la Articulación

En los medios de comunicación, a nivel nacional e internacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), --una coordinación de movimientos sociales influenciada por los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)—aparece como si fuera la conducción de la lucha. Una parte de los movimientos sociales que participan en la ACJD (feministas, movimientos campesinos y grupos estudiantiles) también forman parte de la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua. Un nombre tan largo que es mejor conocido simplemente como “Articulación”. Por ello, sin lugar a dudas, que podemos afirmar que ante la ausencia de sindicatos y organizaciones de trabajadores, el peso de la lucha real de la lucha en las calles contra la

nueva dictadura orteguista, tanto en la fase de ascenso revolucionario como en la fase de resistencia, ha recaído en los fundamental en las organizaciones de bases de la Articulación.

Una vez que la ofensiva militar de la dictadura logró destruir los tranques y barricadas, todo el peso del aparato represivo del Estado ha sido dirigido a quebrar, capturar y procesar

(capturas sin orden judicial) a 1,428 personas, de ese total solamente 125 han sido dejadas en libertad, y el resto permanece prisionera o desaparecida. Se reportan 512 personas asesinados y más de cuatro mil heridos. (La Prensa 24/09/2018)

Aumenta la cantidad de presos políticos

Para finales de julio, la cantidad de activas procesados penalmente eran 135, actualmente la cantidad ha aumentado considerablemente, porque diariamente se reportan capturas, pero no hay cifras oficiales fiables.

Los presos políticos se ha vuelto un tema sensible, que obliga a miles a salir a las calles, reclamando su liberación y desafiando con ello

la represión sofisticada de la nueva dictadura. En su mayoría son jóvenes de ambos sexos, sometidos a proceso penales amañados, con jueces que obedecen ciegamente a la dictadura. Son juicios copiados de la época de la inquisición. Condenados de antemano, estos presos políticos son rehenes que la dictadura quiere canjear más adelante, con una amnistía general que proteja a quienes dieron las ordenes y ejecutaron las masacres.

Ortega quiere “paz social”, para negociar con el COSEP

Esta represión brutal pretende no solo quebrar la columna vertebral de la Articulación, sino evitar que continúe el ritmo ascendente de marchas de protestas en las calles, para crear un clima de negociación confortable para



penalmente, bajo la acusación de “terrorismo” a los liderazgos locales, vinculados a la Articulación. Una parte de estos líderes están clandestinos, otros prisioneros y otros se marcharon al exilio, huyendo de la brutal represión. Doña Francisca Ramírez, lideresa del movimiento campesino anticanal tuvo que cruzar la frontera y solicitar refugio en Costa Rica. Casi todos los líderes estudiantiles que fueron delegados de la ACJD ante el Dialogo Nacional están presos, y otra parte como Lester Alemán y Víctor Cuadras, están en el exilio

Actualmente, según la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyo principal dirigente Álvaro Leiva está en el exilio, la Policía Nacional y paramilitares han secuestrado



la dictadura.

El gobierno Ortega-Murillo se aferra desesperadamente al poder, o al menos a conservar una parte considerable de su absoluto poder. Y ha tenido una estrategia para lograrlo. Primero evitando, con el uso de francotiradores, las manifestaciones multitudinarias de abril, mayo y junio, después destruyendo los tranques y barricadas, masacrando a los activistas populares en los meses de junio y julio, y ahora en la fase resistencia necesita con urgencia contener las incesantes marchas de protesta, por ello se ha centrado en golpear a los movimientos sociales alrededor de la Articulación.

La marcha del pasado domingo 23 de septiembre en Managua fue atacada a balazos, fue asesinado el estudiante Matt Romero y cuatro personas fueron heridas. Ante el auge de las marchas de protesta, la dictadura vuelve a reprimir a balazos, para reimponer el terror y el miedo. Esta situación obliga al movimiento auto convocado a replantearse la organización de las marchas tal como las hemos conocido en estas semanas. Necesitamos retomar aquella táctica usada contra la dictadura de Somoza, de desarrollar pequeñas marchas en los barrios, donde la población es nuestro escudo de protección. La actividad iniciaba con un mitin de agitación, y la población se sumaba, vigilando los puntos de reunión, y de esta manera se tiene una mejor protección contra represión brutal del orteguismo. Lo importante es mantener la llama viva de la resistencia popular hasta que se produzca un nuevo estallido social.

Presiones y amenazas de Ortega: ¿Qué busca?

Otra parte de su estrategia de sostener en el poder es fomentar la

división del COSEP, que a inicios de abril cerró filas contra la dictadura, pero que, después de cinco meses de revuelta popular y masacres, ya comienza a mostrar fracturas en su seno. La ofensiva de Ortega contra los empresarios que se le oponen ha sido especial: movilizándolo a sectores en extrema pobreza, fomentó la invasión de tierras, especialmente de los terratenientes reunidos en la Unión Nacional de Productores Agropecuarios (UPANIC), jefeados por Michel Healy, con el objetivo de atemorizarlos.



Pero, fiel a su estilo, de gritar, amenazar y patear primero la mesa de negociaciones, Ortega ha comenzado a retroceder, desalojando con la Policía Nacional a los "desgraciados" que movilizó para ocupar las tierras de los empresarios opositores. Las escenas han sido dramáticas: estos sectores sociales en miseria han denunciado la traición de Ortega, que les había prometido tierras.

Con una política conocida como "una de cal y otra de arena", Ortega ha comenzado a mostrarse conciliador con los empresarios del COSEP, al desalojar a los ocupantes de tierras que el mismo movilizó, pero sin dejar de amenazar.

Para mostrar que tiene apoyo popular, desarrolla a diario marchas y mítines, utilizando a los empleados públicos que fueron afiliados forzosa y masivamente al FSLN, casi en los mismos puntos donde la resistencia

popular desarrolla las suyas, para demostrar una fuerza o capacidad de convocatoria que se le extingue rápidamente.

Posibles sanciones de Estados Unidos

Ante el fracaso de las negociaciones del Dialogo Nacional, y ante el hecho que las victorias relativas de Daniel Ortega conduzcan a la consolidación de una dictadura familiar, como fue el somocismo, lo que provocará luchas de masas en su contra que amenazan el frágil equilibrio existente en Centroamérica, la administración Trump está usando al máximo el arma de las presiones diplomáticas y las sanciones económicas.

A finales de septiembre el Senado de los Estados Unidos volverá a discutir un proyecto de sanciones económicas contra el gobierno Ortega-Murillo. En todas sus últimas declaraciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha insistido en que los responsables de las masacres en Nicaragua deben rendir cuentas. Al parecer, este es el punto que, por el momento, mantiene trabadas las negociaciones en Nicaragua. Ortega-Murillo y su camarilla necesitan una amnistía general que los proteja de posibles juicios en su contra.

Y en el marco de presiones y contrapresiones, la situación en Nicaragua es cada vez más tensa.

"Economía popular" ante inminentes sanciones de Estados Unidos

En una de estas movilizaciones "portátiles", adelantándose a posibles sanciones por parte del Congreso de Estados Unidos, las que se discutirían en el senado a finales de septiembre.

Por ello Ortega pronunció un discurso a favor de la "economía popular". Ante sus partidarios, Ortega dijo: "(...) Nicaragua va a asegurar



el alimento para los nicaragüenses, porque gracias a Dios somos productores de alimentos, no tenemos que importar los frijoles, ni tenemos que importar el maíz, ni tenemos que importar los plátanos, ni tenemos que importar el arroz, lo producimos aquí en Nicaragua, las naranjas, los limones, la fruta, lo producimos en nuestro país". (El 19 Digital, 22/09/2018)

En pocas palabras, reivindicó la economía basada en pequeños productores ante el inminente deterioro de la economía en manos de los grandes empresarios. Pero este optimismo no corresponde a la realidad, porque el desplome de la economía golpeará también a su base social histórica, y provocará una mayor erosión política.

En uno de sus giros característicos, Ortega blandió la zanahoria y el garrote ante los empresarios del COSEP. Amenazante, afirmó que: "(...) Ahora, si el empresario quiere apoyar un partido político, si quiere formar un partido político, están en su derecho (...) Tiene que cumplir con su deber como empresarios.

Y luego llegará el momento de las elecciones, y las elecciones son en el mes de noviembre del 2021". (op cit)

Ante el anuncio de la posibilidad de un nuevo Paro Nacional de 72 horas, para los días 26 al 28 de septiembre del año en curso, Ortega amenazó al COSEP: "(...) Y salen con el cuento algunos de estos empresarios, dueños de grandes empresas, que se tiene que ir al paro porque los están amenazando que les van a quemar el negocio sino van al paro. Pues la próxima vez que llamen al paro vamos a llamar a la policía que se mantengan las puertas abiertas y que eso, eso les dé entonces la seguridad de que nadie les va a quemar el negocio (...)"

Por queda alguna duda, Ortega desaloja a los ocupantes de tierras, pero al mismo tiempo mantiene las amenazas, con ello pretende crear

una nueva mesa de negociaciones, otro Dialogo Nacional, más cerrado, para negociar posibles reformas democráticas.

El recule del COSEP y las tímidas protestas del FUNIDES

Es un secreto a voces que el COSEP está dividido entre quienes quieren negociar a cualquier costo con Ortega, y entre quienes presionan por un cambio de régimen político a través de elecciones anticipadas, vigiladas por la OEA y la ONU.

Las presiones de Ortega, dieron resultado. El COSEP no llamó al Paro Nacional de 72 horas, como lo exige la mayoría de la población. En cambio,



emitió una declaración nostálgica del periodo en que prevalecieron el dialogo y el consenso con el gobierno, para concluir que: "(...) resulta prioritario que se reinstale a la mayor brevedad el diálogo con la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediador y testigo, e incorpore a garantes internacionales para garantizar que sus acuerdos sean cumplidos.

(...) Por lo que depende hoy más que nunca, de la voluntad política del Presidente de la República que el país retome el camino del diálogo y que en el seno de este se alcance el acuerdo político que permita pacificar y reconstruir nuestro país bajo principios de democracia y justicia (...) reiteramos que solo el diálogo efectivo, amplio, inclusivo y confiable es el camino para encontrar la solución

a la grave situación que vivimos los nicaragüenses". (COSEP, 24/09/2018)

En el último periodo, especialmente después de la destrucción de los tranques y barricadas, el COSEP ha bajado el tono de los ataques contra Ortega y se ha mostrado más conciliador. La traición del COSEP es más que evidente.

A diferencia del COSEP, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), un centro de pensamiento empresarial, levantó una tímida voz de protesta, al expresar que "las declaraciones del Presidente de la República del día 22 de septiembre no aportan hacia la búsqueda conjunta de una solución cívica y pacífica a la crisis política, sino que exacerban y profundizan la fractura social que actualmente vive el país. Las acusaciones de "terrorismo económico" contra el sector privado es una forma de criminalización de la protesta (...) Hacemos un llamado a las autoridades a detener las constantes amenazas y asedios a la ciudadanía y abrir las puertas hacia un diálogo que cuente con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (...)" (FUNIDES,

25/09/2017)

A pesar de los matices, ambas instituciones coinciden en demandar la reinstalación del Dialogo Nacional, con presencia de la Iglesia Católica. Sobre el clamor popular que exige la convocatoria a un Paro Nacional, ni siquiera lo mencionaron.

La crisis de la ACJD

Desde el inicio de la insurrección en abril del 2018, insistimos en nuestra caracterización que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), era una coalición influenciada por el COSEP. Y también dijimos que si bien es cierto se requería la unidad de acción con aquellos sectores empresariales que se oponían a la nueva dictadura, también dijimos que los movimientos sociales debían mantener la independencia



política absoluta en relación a los empresarios del COSEP, porque estos fueron aliados de Ortega y tienen intereses económicos distintos a la mayoría del pueblo.

Nuestros temores se han confirmado. El COSEP reclutó para su propio proyecto de negociación por separado con la dictadura, a una parte de los líderes estudiantiles, los cuales incluso fueron desconocidos por sus bases. Las vacilaciones de una parte de los empresarios, ha provocado divisiones y rencillas entre los líderes y las organizaciones estudiantiles y populares. Una parte de estos ha reflexionado y ha denunciado públicamente las manipulaciones de los operadores políticos de los grandes empresarios.

Los relativos éxitos de la represión orteguista, y la disminución de la presión popular e las calles, han incidido en que una parte de los empresarios del COSEP comienzan a guiñarle el ojo a Daniel Ortega. Este viraje o claudicación ha incidido gravemente al interior de la ACJD, las divisiones al interior

del COSEP se refractan dentro de la primera. El resultado final ha sido la parálisis de la ACJD, lo que se comprueba en el hecho que las últimas marchas exigiendo la libertad de los presos políticos no fueron convocadas por la ACJD, la que ha perdido capacidad de convocatoria, sino por los movimientos sociales ligados a la Articulación. Esto explica la furia de la represión orteguista para desarticular a las bases sociales de la Articulación.

La propuesta de Concertación Nacional "Azul y Blanco".

En este preciso contexto, el pasado 10 de septiembre, la Articulación dio a conocer públicamente un documento titulado "Propuesta para una Concertación Nacional "Azul y Blanco" contra la dictadura y por la

democratización de Nicaragua".

No hay duda que para derrotar a la dictadura asesina se requiere la más amplia unidad de acción de todos los sectores sociales que se muestren dispuestos a luchar por la democratización de Nicaragua. La unidad de acción es necesaria, el problema es con quien la hacemos, que sectores sociales están dispuestos.

En su documento, la Articulación plantea que la Concertación Nacional debe estar conformada por "(...) Todos los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, gremiales, sindicales, profesionales, empresariales, académicas, culturales,

en momentos en que los empresarios comienzan a recular, y buscan desesperadamente un acuerdo con la dictadura, el cual no necesariamente implica la democratización del régimen.

En este proceso observamos que la Articulación, en aras de lograr la más amplia unidad de acción (lo cual es correcto) también, paralelamente, ha comenzado a abandonar (lo cual no es correcto) algunos de sus postulados esenciales: ha abandonado la consigna de renuncia inmediata del matrimonio Ortega-Murillo, ha abandonado la necesidad de instaurar un gobierno provisional revolucionaria que se encargue de organizar y convocar a elecciones democráticas, y también ha abandonado como eje central la consigna de Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

Paro Nacional Indefinido desde abajo

A como hemos visto, debido a las posiciones cada vez más tibias y conciliadoras del COSEP y FUNIDES, existe el peligro real que los luchadores sociales de la Articulación no

encuentren a ese aliado con el cual buscan concertar, y más bien tengamos que seguir peleando en cierta soledad al lado de las masas populares, como lo hemos hecho desde abril de este año.

En estas duras condiciones, lo único que puede tumbar a la dictadura es organizar un Paro Nacional Indefinido, pero desde abajo, desde los barrios, mercados, empresas y fábricas. No depender nunca de la voluntad de los empresarios que en cualquier momento vuelven al regazo de Daniel Ortega. La única manera de ganar esta pelea es a través de la lucha independiente, como lo hemos venido haciendo.

Esta es una discusión muy importante para el futuro de la lucha democrática. ■



feministas, campesinas, indígenas, de mujeres, de pueblos afrodescendientes, de la diversidad sexual, partidos políticos no orteguistas, etcétera, pueden ser parte de esta iniciativa de integración de todos los sectores que adversan al régimen Ortega-Murillo".

Hasta donde sabemos, todos los movimientos sociales actualmente existentes y en lucha contra la dictadura, excepto los empresarios del COSEP, están organizados alrededor de la Articulación.

A veces tenemos la impresión que la propuesta de Concertación Nacional estaba dirigida fundamentalmente a la ACJD, la cual como hemos visto está en una profunda crisis. El panorama es muy complejo, porque todo indica que la Articulación ha girado un poco hacia la ACJD (dirigida por el COSEP)



A PROPÓSITO DEL 15 DE SEPTIEMBRE: LUCHEMOS POR UNA NUEVA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA DE CENTROAMÉRICA

En el mes de septiembre, todas las burguesías de la región centroamericana celebran la independencia en relación a España, ocurrida el 15 de septiembre de 1821, como si fuese propia de los pequeños Estados nacionales actuales, olvidando que en esa época Centroamérica estuvo organizada, primero, en las Provincias Unidas de Centroamérica (1 de julio de 1823)

y posteriormente se constituyeron, el 22 de noviembre de 1824, en la República Federal de Centroamérica que existió hasta que, en el año 1838, Nicaragua se separó e inicio el proceso que terminaría en la disolución del Estado Federal.

En el siglo XIX, Centroamérica proclamó en dos ocasiones su independencia. La primera vez, ocurrió el 15 de septiembre de 1821, cuando las propias autoridades coloniales, ante el temor de la revolución popular, proclamaron su independencia de España, aunque inmediatamente se anexaron al imperio mexicano de Iturbide.

El rápido derrumbe de este y la proclamación de la Republica en México, influyó para que las autoridades de Centroamérica proclamasen la segunda independencia, el 1 de julio de 1823, cuando solemnemente emitieron un decreto reconociendo que "la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mexicano... fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales" y que por lo tanto, las provincias de Centroamérica "representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia".

Estos aspectos de nuestra historia no son muy conocidos. Pero este año 2018, las celebraciones oficiales de la independencia de 1821, han estado



marcados por nuevos acontecimientos.

Crisis económica y ruptura del statu quo

La crisis económica y política de la burguesía centroamericana no conoce fronteras. El statu quo creado por el imperialismo norteamericano, a raíz de la aplicación de Esquipulas II (Nicaragua en 1990, El salvador en 1992 y Guatemala en 1996) está agotado y en crisis. Nuestras economías semi coloniales se ven directamente perjudicadas por la crisis económica mundial y por los dictados del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Los aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, en los últimos dos años, se viene a agregar a otras dificultades estructurales del modelo capitalista de los países de Centroamérica.

Estos aumentos, según Oscar Ugarteche, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, "impulsará a la baja el precio de las materias primas, lo que reducirá el valor de las exportaciones e impactará en el crecimiento del PIB de muchos países de la región. " (BBC MUNDO 15/12/2016)

En ese mismo sentido, un experto de la agencia calificadora Moodys

presagiaba que los países "que dependen de los mercados internacionales para financiar el déficit fiscal ...enfrentarán mayores dificultades para bajar sus propias tasas de interés...y el aumento en las primas de riesgo que tienen que pagar por financiarse los mercados emergentes" (Idem)

Saqueo imperialista y desplome de los

niveles de vida

Esto parece la crónica de una crisis anunciada, a lo que se suma una política conjunta emanada por los organismos financieros internacionales, en el sentido de bajar o suprimir los impuestos a los exportadores y hacer regalos fiscales a las empresas internacionales que se instalaran en los diferentes países del área.

Este modelo solo podría ser sostenido si el grueso de la carga tributaria y de la carga de la crisis financiera se cargara sobre la espalda de los trabajadores y del pueblo. Este ejemplo de la brutal contrarrevolución económica en El Salvador es elocuente: "Tomando como base el poder adquisitivo del salario mínimo en 1979, se observa que los salarios mínimos urbanos han perdido el 80% de su capacidad de compra, mientras que en el área rural la reducción es del 91%. »(uca.edu.sv 23/05/2016). En la cola de este escalafón se encuentra los salarios mínimos en Nicaragua que alcanzan 123 dólares en el sector agropecuario y 276 en la construcción y establecimientos financieros (El Nuevo Diario 19/11/2017)

Por otro lado, los regalos fiscales para los grandes no cesan de aumentar. Ya hace casi una década, los



montos de las exoneraciones fiscales representaban un alto porcentaje del PIB "En Guatemala, las estimaciones del Gasto Tributario son publicadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Finanzas Publicas. De acuerdo a estas cifras, el gasto se estimó entre el 12% y el 14% del PIB en años pasados, lo cual es un monto alto en comparación con su carga tributaria, la cual oscila alrededor del 10% del PIB." (Icefi.org 2007)

La pauperización de las masas trabajadoras y populares de Centroamérica, es el resultado de una brutal ofensiva económica y social después de la derrota de la revolución centroamericana encabezada por las organizaciones guerrilleras y combatida brutalmente por las dictaduras y gobiernos cipayos de toda el área.

El fracaso de las guerrillas: no condujeron a la liberación

Después de la implementación de los acuerdos de Esquipulas II, las organizaciones guerrilleras del área consolidaron un giro a la derecha. Poco a poco, tanto en Nicaragua, como en El Salvador y Guatemala, se fueron transformando en partidos integrados al marco democrático burgués, desde el gobierno o desde la oposición. La cúpula del FSLN se transformó en una nueva burguesía. En El Salvador, la cúpula del FMLN aspira a convertirse en el representante político de la burguesía emergente. En Guatemala, la URNG fracasó en el intento de convertirse en una poderosa organización política con influencia de masas.

Estas ex guerrillas, una vez en el gobierno, como ha sido el caso del FSLN y del FMLN, han aplicados las mismas recetas económicas neoliberales de los gobiernos de la derecha: austeridad, hambre, empleos mal pagados o desempleo a secas.

La migración de cientos de miles de compatriotas hacia los Estados Unidos y Europa se explica por este saqueo brutal de las fuerzas productivas y el consecuente deterioro de las condiciones de vida y de la seguridad en la región. Centroamérica se ha transformado en una región que se

ha visto presa de la violencia de las maras y del narcotráfico, siendo estas pandillas un medio de sobrevivencia para los sectores desclasados alejados del empleo y la formación.

Una nueva generación toma la batuta y sale a pelear

En Honduras, la lucha contra el fraude electoral del gobierno de JOH fue uno de los puntos altos de la movilización popular en la región. La situación en Honduras es realmente explosiva.

En Panamá se han desarrollado movilizaciones estudiantiles y populares contra el alza de energía. Desde el mes de abril, las masas nicaragüenses han enfrentado el gobierno dictatorial de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Este movimiento, tal y como ocurrió hace casi cuarenta años, ha sido el epicentro de una onda revolucionaria.

Tal y como vemos en Nicaragua, una nueva generación combate a la dictadura de Ortega-Murillo. La represión ha sido cruenta y por el momento la resistencia ha tomado otros métodos para evitar el encarcelamiento y la aniquilación por parte de los escuadrones de la muerte del régimen.

En este mes de septiembre del 2018, a lo largo y ancho del territorio centroamericano, las masas trabajadoras y populares han hecho irrupción en diferentes grados.

En Guatemala se vive un ambiente de agitación política contra el gobierno de Jimmy Morales, por el hecho de anunciar que no renovará el acuerdo para el mantenimiento de la CICIG. La lucha contra las mafias enquistadas en el Estado de Guatemala ha adquirido ribetes dramáticos.

En Costa Rica cerca de medio millón de personas salieron este 12 de setiembre a marchar en el centro del país contra el combo fiscal. Miles de nuevos activistas hacen también sus primeras experiencias después de la lucha contra el combo del ICE hace casi dos décadas. En estos momentos se desarrolla una Huelga General Indefinida, con bloqueos de carreteras, y con amplia participación popular

Necesitamos construir una nueva dirección regional

Los luchadores en toda el área pueden ver que las causas y los motivos de la lucha son los mismos en cada país. Los nuevos planes de austeridad, llámense como se llamen, tienen la misma fuente: el imperialismo norteamericano, los organismos financieros internacionales y las burguesías locales. Ellos tienen sus organismos regionales e internacionales los cuales con coherencia aplican los acuerdos.

Por nuestro lado, tenemos algunos organismos que no cumplen su labor. Las centrales sindicales centroamericanas, en algunos gremios que no pasan de ser agencias de turismo para los dirigentes burocratizados. Debemos luchar por unificar las luchas que los trabajadores libran a nivel de cada país, democratizando los sindicatos existentes o construyendo nuevas organizaciones.

Pero la lucha no es solo a nivel de los sindicatos, sino también a nivel político. Sin renunciar a nuestra propia construcción como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) necesitamos desarrollar la más amplia unidad de acción entre los escasos grupos de izquierda, para que, en base a la experiencia común, avancemos a la constitución de frentes políticos que permitan avanzar en la construcción de una alternativa revolucionaria, democrática y antiimperialista en la región centroamericana.

Necesitamos avanzar hacia nuestra tercera independencia política, hacia la liberación de Centroamérica, destruyendo la opresión del imperialismo norteamericano, que permita la reunificación de Centroamérica, constituyendo una nueva república federal: Los Estados Unidos de Centroamérica, que incluya a Belice y Panamá.

Centroamérica, 15 de septiembre del año 2018.

Secretariado Ejecutivo
Centroamericano (PSOCA)

Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) ■



EL ESTUDIANTADO DE LA USAC ACCIONA ANTE LA ACTUAL COYUNTURA

Por Herculía Cáceres

Luego de más de 17 años, el jueves 6 de septiembre de 2018 se realizó la primera asamblea general de estudiantes convocada por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) "Oliverio Castañeda de León", debido a presiones desde el sector estudiantil en relación con la coyuntura nacional causada por el gobierno de Jimmy Morales. La asamblea representaba un gran reto para el sector estudiantil porque después de casi 2 décadas sin tradición de lucha, ni organización, la apatía era uno de los mayores desafíos que se debían romper y a pesar de los esfuerzos de convocatoria, la presencia estudiantil fue satisfactoria más no masiva.

Las asambleas generales

Se realizaron dos asambleas, una para la jornada matutina a las 12:00 PM y otra las 5:00 PM para la jornada vespertina y nocturna. En la matutina, según datos de la AEU, se alcanzó la presencia de más de 600 personas, esta cifra fue duplicada en la tarde/noche. La asamblea necesitaba escuchar las voces silenciadas, pero en un inicio la metodología propuesta las limitaba, ya que el sector estudiantil fue organizado por unidades académicas, y debía ser una persona la vocera que expresaría el sentir de todo el bloque. Vale la pena recalcar que esa metodología no era completamente representativa, ya que estudiantes de distintas jornadas académicas se hicieron presentes fuera de sus unidades, pero no expresaron sus demandas porque era individuos, no bloques; pero era evidente la necesidad de expresarse y las asambleas se salieron de la línea indicada haciendo uso de la palabra sin orden establecido ¿Cómo limitar el pensar de los estudiantes después de tanto no expresarse fuera de sus unidades académicas?

El descontento era claro, el sector estudiantil estaba molesto y no sólo contra el gobierno del país, sino también contra las autoridades del Consejo Superior Universitario (CSU), exigiendo posturas claras, no tibias, ni mucho menos que actuaran servilmente ante las manipulaciones desde el legislativo en contra de las movilizaciones universitarias

a cambio de la ampliación presupuestaria que por ley le corresponde a la USAC. Así que un grupo de estudiantes asaltó los techos de la rectoría y quitó una manta de muchos metros de altura de la campaña publicitaria del actual rector Murphy Paiz con la frase: Yo amo la USAC, la lanzaron desde lo alto, entre aplausos y gritos de victoria; algunos policías intentaron tomarla, pero otro grupo de estudiantes no lo permitió, se plantaron de fuerza mientras la arrebataron siendo una

en ese preciso momento, ya que el día viernes existía una convocatoria pero se corría el riesgo de que los cobardes representantes del Consejo cambiaran de lugar la sesión. Entre debates, se acordó respetar esa propuesta pero en los hechos fue un sector reducido el que siguió a la representante. Muy similar fue la dinámica durante la tarde/noche, acordándose ocho puntos principales.

Al día siguiente la reunión del CSU estaba programada a las 3:00 PM en la ciudad universitaria, pero como ya había sido previsto, la cobardía del rector y demás representantes, hizo que cambiaran de lugar la sesión que iba a ser realizada en las afueras de la USAC y más tarde fue cambiada nuevamente para realizarse en La Estancia (restaurante sumamente costoso, ubicado en un centro comercial). Los estudiantes presentes en un plantón en el edificio de rectoría se manifestaron en contra, junto con más estudiantes



simbólica acción en contra de la tibieza del rector.

Las demandas eran claras, no más comunicados ni manifestaciones desgastantes en la Plaza Central de la ciudad, organizar de primera mano a la comunidad universitaria y después buscar la organización con los diferentes sectores del pueblo guatemalteco. Las principales propuestas fueron: el paro nacional, toma del edificio de rectoría para exigir una sesión extraordinaria, una toma en el Congreso de la República y evitar la aprobación de la ley 5300, además de declararse en asamblea permanente. Otras de las exigencias de los estudiantes radicarón en exigir acciones de hecho a la AEU y respaldarlas cuando fuera necesario, asambleas en las otras jornadas estudiantiles (no se realizaron asambleas generales en el plan sabatino, ni dominical), toma de la universidad y un paro activo de toda la comunidad universitaria, pero ninguna de estas últimas fue tomada en cuenta.

Los estudiantes presionan al CSU

Durante la asamblea del medio día, una representante estudiantil del CSU, pidió apoyo para realizar una toma en rectoría y exigir una sesión extraordinaria

pendientes desde otros lugares, cuando se tomó la iniciativa de manifestarse en las afueras de dicho restaurante. Cuando se llegó a La Estancia, la AEU en compañía de otras agrupaciones se plantaron y gritaron consignas, después ingresaron a exponer su solicitud, pero no se veía avance en la aprobación de las exigencias, por lo que a eso de las 7:00 de la noche ingresaron sin autorización, para replantear el descaro de sesionar fuera de la Universidad, además de hacer presentes las demandas estudiantiles.

Mientras todo esto sucedía fuera de la USAC, dentro de ella un grupo de estudiantes molestos decidió tomar el edificio de Rectoría para que los consejeros aprobaran las demandas antes mencionadas. La acción se realizó, en su mayoría por estudiantes de la Escuela de Historia, quienes esperaban respuestas claras y tomar decisiones relacionadas con el edificio, pero en la reunión celebrada corrían rumores de que estudiantes destruían las instalaciones de la rectoría, con la intención de criminalizar al sector estudiantil. Más tarde dos personas, aparentemente trabajadores del rector llegaron a su oficina a retirar 2 bolsas llenas con documentos, levantando sospechas en el numeroso grupo de estudiantes, así que



detuvieron a estos dos trabajadores para que rindieran cuentas de los documentos, pero no fue así, de esa manera se dio un enfrentamiento por medio de exigencias a los presuntos responsables de irregularidades, quienes se asustaron por el descontento generado. Cuando enviaron información de las demandas aceptadas se decidió dejar libre la Rectoría.

Las protestas frente al Congreso logran suspender la sesión plenaria

El martes 11 de septiembre estaría por realizarse la tercera lectura de la ley 5300 en el Congreso de la República; recordando que en la pasada Asamblea general quedó como punto realizar una toma alrededor de dicho recinto para impedir el ingreso de los diputados asociados al "Pacto de Golpistas", el lunes se llevó a cabo una velada artística, convocada por la AEU en el Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC), ubicado frente al Congreso, que inspiraba la democracia y la paz. Dicha actividad tenía como fin último preparar la toma de una calle pacíficamente frente al congreso y de esa manera iniciar el plantón por la democracia y la paz, sin fines de alterar el orden público. Cabe mencionar que a dicha convocatoria asistió un reducido número de estudiantes, pero los suficientes para llevar a flote la actividad iniciada.

Por la mañana del martes, las personas que mantuvieron su descanso en el MUSAC se toparon con una fila de policías que protegían el Congreso, por lo que se realizó el llamado para acuerpar la toma de la calle a los estudiantes universitarios y población en general; debido al reducido número no se logró impedir el ingreso de algunos diputados a tempranas horas. Más tarde, aún durante la mañana se hizo presente un grupo más grande de estudiantes, que rodearon las dos entradas que posee el edificio del organismo legislativo, gritando consignas. La sesión extraordinaria del congreso que discutiría la iniciativa de ley 5300 estaba programada para las 2:00 PM, pero por la mañana asistió el ministro de salud a una reunión dentro del Congreso.

A la salida del ministro mencionado, en horas del mediodía, un grupo de estudiantes se manifestó e inició su persecución hasta que éste tuvo que resguardarse dentro de un comercio de zapatos, siendo inmediatamente resguardado por un buen número de policías. Estuvo dentro por algunos minutos mientras decenas de manifestantes rodeaban las afueras de la zapatería, gritando enfurecidos y exigiendo su salida, además de exigir a la fuerza policial que dejaran de resguardar a un asesino de cientos de enfermos en hospitales públicos y centros de salud. Dentro de la zapatería, el ministro expresó frente a los medios de comunicación su

temor a la población enfurecida, pero momentos más tarde salió a la sombra de los insultos y se marchó velozmente en su automóvil blindado.

Por la tarde se hizo conocimiento de la suspensión de la sesión por los diputados (esta sería programada para el día siguiente), por lo que inmediatamente la mayoría de los estudiantes, que no superaba las expectativas de la convocatoria desde el inicio, se retiró, dejando a un reducido grupo de personas que esperaban la salida de los diputados aún dentro del Congreso. A la salida de los diputados se realizó un cordón con 2 filas de policías; algunas de las agentes expresaron al jefe policial su descontento en tener que proteger a los diputados, pero acataron la orden de protegerlos. El cordón se rompió gracias a la rabia que sentían los manifestantes que despidieron bajo insultos a los personajes de la corrupción. Por la tarde, esta manifestación fue suspendida por un grupo conocido como "la batucada del pueblo", conocido por ser un agente desmovilizador del descontento social, que se esconden bajo un traje de consignas que no trasciende en acciones que incidan verdaderamente ante el régimen.

Los estudiantes marchan junto al movimiento campesino

Después, el miércoles 13 estaba programada una movilización por parte del Comité de Desarrollo Campesino CODECA, que sería respaldado por la Asociación de Estudiantes Universitarios, que pretendió ser intimidado por un gran despliegue policial y militar en los alrededores de los lugares donde pasaría la marcha. Mientras, el CSU realizaba una sesión ordinaria con sus representantes en el Campus Central, que se vio interrumpida por un grupo de encapuchados denominados "Organización de Huelga de Dolores", integrada por un grupo de choque con tácticas paramilitares que buscan reprimir acciones de verdaderos estudiantes. Se presume que el rector Murphy Paiz, tenía conocimiento de esta actuación ya que el día anterior envió un audio a los consejeros informando el posible atraco, recordando que Paiz ha sido un personaje que se posiciona favor de estos grupos. El grupo de encapuchados llevó al Consejo, un mediocre documento en el que "exigen" llamar Non Gratos a Jimmy Morales y el vicepresidente, exrector Jafeth Cabrera.

Más tarde, se acercó un grupo de estudiantes de Agronomía a tomar la sala de sesiones del CSU, sin conocer con claridad sus demandas; lo que evidencia una fractura en el movimiento estudiantil, debido a que la AEU se encontraba acompañando la marcha de CODECA y este grupo en acciones distintas. Esa fractura solo demuestra

una inmadurez política en busca del protagonismo mediático, alejada de un interés en conjunto. De la misma manera, el estudiantado ve de manera inestable la posición de los dirigentes estudiantiles que no presentan una postura concisa y digna de ser la consigna de lucha de todo el sector estudiantil.

La manifestación del 20 de septiembre

En 2017, se realizó un "paro nacional" el 20 de septiembre, convocado desde la AEU y el exrector Carlos Alvarado Cerezo, que hizo que un gran porcentaje de la comunidad universitaria saliera desde el campus hasta la Plaza Central, manifestando contra el presidente Jimmy Morales. Este año, ante la expectativa de los diferentes sectores sociales, la AEU convocó una marcha con la consigna de un "Preparo". En la movilización se observó que el número de asistentes de la USAC se redujo considerablemente con respecto a la de 2017, pero se sumaron múltiples organizaciones sociales y otras universidades privadas, repudiando la actual crisis política por la que atraviesa el país. Los sancarlistas, además de exigir la renuncia del binomio presidencial, también gritaron consignas exigiendo el 5% del presupuesto nacional. En esta movilización se hizo presente el CSU gracias a las presiones estudiantiles, repudiando la corrupción cuando todos saben que la mayoría de estos son cómplices de las irregularidades financieras dentro de la USAC.

Luego se recorrió un gran número de kilómetros, se llegó a la Plaza Central, en dónde estaba una tarima con un gran número de personas gritando consignas y expresándose por medio de discursos. Entre los personajes que dieron su discurso se encontraba Murphy Paiz, que fue recibido con abucheos por los asistentes, ya que en múltiples ocasiones se le vincula a casos de corrupción. Movilizaciones como esta dan una esperanza a muchos estudiantes, pero no convencen a otro buen número políticamente más atrasado que no las consideran como acciones que en realidad cambien algo. El hecho de que la Asociación de Ingeniería, junto al Comité de Huelga de esa facultad, marchara por separado, arribando a la plaza al menos media hora antes que el grueso de la manifestación, muestra las varias caras que hay dentro de la universidad. Se debe trabajar para que el gobierno estudiantil dirija el movimiento también hacia acciones reivindicativas que atraigan a los sectores menos politizados, les anime a organizarse y se identifiquen con los más despiertos y conscientes, para lograr un movimiento estudiantil fuerte y unido.

MOVILIZACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE, INTERESES CONTINUISTAS E IMPUNIDAD EN EL CASO BERTA CÁCERES

Por Horacio Villegas

En las semanas y días que transcurren en este mes de septiembre, han ocurrido distintos episodios en la vida nacional. Como la movilización que desde el golpe de Estado del 2009 se ha programado al margen de los desfiles que se dirigen al Estadio Nacional; las declaraciones vertidas por Zelaya en torno al tema de la reelección; y el caso Berta Cáceres, que a pesar de los esfuerzos de varias organizaciones por buscar justicia, sigue impune, y mientras tanto, sus perpetradores siguen libres.

Balance sobre la movilización del 15 de septiembre

Desde el golpe de Estado de 2009 se fraccionó la tradicional "fiesta cívica" del 15 de septiembre convocada como todos los años, en el Estadio Nacional que lleva el nombre del dictador Tiburcio Carías Andino. Las razones son obvias: las motivaciones y las repercusiones de este golpe de Estado, desgastaron el alienante civismo que ha habido entorno de esta ilusa celebración.

El entonces FRNP, y todas las organizaciones que le hicieron frente al militarismo, y que a su vez componían el movimiento gestado en las calles, organizaron una celebración alterna que le hiciera oposición al engendro de aparente civismo que idolatraba a los artífices y cómplices del golpe de Estado, los representantes de los partidos tradicionales que asumieron el gobierno (Micheletti primero, y Lobo Sosa después).

La recurrencia de esta otra práctica que se resiste a formar parte del viejo patriotismo lacayo, ha tendido a convertirse en una tradición que en sus inicios dio a conocer el descontento de la gente en contra del golpe de Estado. Hoy la práctica sirve para rendirle culto a la figura de Manuel Zelaya y su partido Libre, y no para antececer la resistencia popular que surgió en

defensa de la democracia en aquel 2009 lleno de represión y asesinatos.

Las recientes celebraciones alternas de esta fecha ha tenido poca participación de los sectores que antes fueran baluartes en la lucha popular contra el golpe; la movilización pasada concentró en su mayoría a las organizaciones que encabezan las estructuras de Libertad y Refundación, y no tanto a organizaciones de



trabajadores, y otras organizaciones barriales protagonistas en la lucha contra el fraude electoral.

Después de noviembre del año pasado la dinámica de lucha ha tendido más al retroceso en relación a las ofensivas graduales del gobierno: la victoria gubernamental contra el sector transporte que pedía las rebajas al combustible, y hoy, para los meses que vienen, el siguiente aumento a los carburantes.

El gobierno nacionalista, que se encuentra en su segundo periodo dentro del esquema continuista, se ha impuesto a la fuerza con un fraude electoral a ultranza, y al parecer el movimiento popular fraguado en contra de esta aberrante figura dictatorial, no tuvo en su momento la dirección adecuada para derribar al nefasto partido de gobierno. Las repercusiones las estamos viviendo en la actualidad, momento que se define por la espera que hay por recobrar las fuerzas perdidas el año pasado.

Espacios como la Convergencia

Contra el Continuismo (CCC) han surgido a luz pública desde el anuncio de los primeros intentos continuistas de JOH, y después de la crisis post-electoral; su método es aglomerar a la mayor parte de organizaciones para al fin crear una plataforma que intente hacerle oposición al gobierno.

La presencia de esta plataforma fue notable en la movilización del 15 de septiembre, pero un poco aparte de la dirección de la misma, ya que cedió, en los hechos, la dirección de esta movilización al partido Libre. Todas las organizaciones civiles que van surgiendo en el transcurso de los acontecimientos, unas radicalizadas, que las forman estudiantes y otros sectores, y otras más proclives al pacifismo y el onegeísmo, son absorbidas, las unas y las otras, lamentablemente, por la dirección burguesa de Libertad y Refundación.

La jornada del 15 de septiembre terminó en una batalla frontal contra las fuerzas represivas, que tuvo las mismas características del pasado 1 de mayo: luego del discurso del caudillo Zelaya, los policías dispersaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes.

La tarea impostergable que tenemos los jóvenes, los que estamos en contra de esta dictadura procedimental y llena de recursos legalizados a la fuerza –el ejemplo es el fallo absurdo de la corte suprema de justicia sobre la "inconstitucionalidad de la constitución"–, es organizarnos al margen de las estructuras avejentadas y reformistas de Libertad y Refundación, buscar alternativas y estrategias que en los hechos no le claudiquen al programa de dirigentes enfermizos y llenos de obsesión continuista y antidemocrática. Una organización de izquierda que rescate y sepa entremezclar la tradición revolucionaria con las exigencias más imprescindibles del presente.

Intereses continuistas de un lado



y de otro

Manuel Zelaya, la figura que representa la dirección del Partido Libre, ha convocado a una consulta para el mes de enero del próximo año, en donde figurarían ciertas preguntas que dejan por sentado el interés continuista del caudillo de Olancho. Inclusive Nelson Ávila, uno de los representantes críticos de Libre, ha cuestionado este intento de consulta sobre el tema de la reglamentación de la reelección presidencial, que deja en un plano oportunista al dirigente olanchano. Por su parte Zelaya anunció desde su cuenta de Twitter el proyecto de consulta que su partido llevará a cabo a sabiendas del descontento de sus sectores más críticos.

"#LIBRE y bancada consultara (á) al pueblo para detener tirano y sus #crímenes. La justicia está bajo sus órdenes; reglamentar sentencia ilegal ES UNA #ALTERNATIVA para asegurar su salida. El decreto ellos mismos lo llevaron al Congreso. Sacar a @JuanOrlandoH es 'vox populi'" (Escrito en la cuenta de Twitter de Manuel Zelaya, colgado en Proceso Digital, 16 de septiembre de 2018).

Libre, como todo partido reformista, confía más en los procedimientos legales y negociaciones con el régimen, antes que en el verdadero protagonismo de los sectores sociales en lucha. La crisis que devino del golpe de Estado del 2009 primero, y la crisis post-electoral después, nos han demostrado el verdadero proceder de este partido, que termina pactando los intereses innegociables de las clases populares, lo vimos en el Acuerdo de Cartagena de Indias del 2011, y en la actualidad, con los cachurecos al aceptar su agenda continuista.

El futuro recambio de la dictadura empieza a disputarse desde ahora

Los representantes más abyectos del Partido Nacional se empiezan a disputar el liderazgo dentro de su propio partido; como zopes carroñeros encima de carne pútrida, así se muestran estos nefastos rostros públicos del partido de gobierno al anunciar silenciosamente su ambición presidencial para el 2021. Esto con el único fin de fijar el nuevo rostro de la dictadura.

"El designado presidencial Ricardo Álvarez, el ministro de Desarrollo e Inversión Social, Reinaldo Sánchez,

el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y Nasry Asfura, actual alcalde capitalino, son los potenciales precandidatos presidenciales del partido en el poder..." (La Prensa, 7 de septiembre de 2018).

Esta lucha interna evidencia el recambio de figura presidencial que buscan los nacionalistas para oxigenar la imagen de su partido, no les conviene mantener en el poder la figura de JOH, pues les costaría la radicalización de las protestas y un escenario desfavorable a nivel internacional; aunque los gringos no se inmuten, ya que se cumple a cabalidad con sus planes en este país del triángulo norte. Estados Unidos contempla el saneamiento de los Estados centroamericanos que se corroen bajo el fenómeno de la corrupción, esto con los matices particulares en Guatemala con la CICIG, y en Honduras con la MACCIH, pero apoya a estos gobiernos conservadores que se tuercen ante sus políticas financieras.

Caso Berta Cáceres continúa en la impunidad

En el contexto de la propaganda gubernamental de una ley de consulta previa, libre e informada propuesta por la empresa privada y los nacionalistas, y en el contexto también de varios proyectos extractivos que han sido combativos por organizaciones indígenas y campesinas, surge con mucha más vitalidad, el caso Berta Cáceres.

Desde que se dio a conocer a finales del año pasado un informe realizado por investigadores independientes al Ministerio Público y demás instituciones estatales, ha surgido la certeza de que han sido los directivos de Desarrollos Energéticos DESA, y empresarios de renombre como los Atala, los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016.

Los representantes de la oligarquía en Honduras, los dueños de descomunales propiedades de tierra en el país, y los encargados de todos los rubros económicos, un puñado de empresarios árabe-Palestinos, en este caso los Atala, son los responsables también de haber encargado a sicarios el asesinato de la compañera Berta. Mientras sigan surgiendo más liderazgos del movimiento social, la oligarquía hará lo imposible por arrebatar la vida de estos luchadores sociales, pues el

extractivismo es un negocio que les da muchas ganancias a estos capitalistas nacionales.

Debemos apostarle a la unidad, al acompañamiento de toda forma de organización del movimiento social, y otras organizaciones de izquierda; una organización que tenga como objetivo sofocar los planes extractivos de la empresa privada y los gobiernos que históricamente han entregado la soberanía nacional en manos de extranjeros, dígame a secas, los partidos tradicionales: Liberal y Nacional.

El Copinh ha confirmado, este lunes 17 de septiembre, al no habersele admitido la garantía de derechos como víctimas de este crimen a varios de sus miembros, las redes de corrupción e influencia que perviven en instituciones como el Ministerio Público. Con esto se da por sentado que el derecho, en una dictadura, tiende a defender a los correligionarios del dictador, y nunca a los que han sido víctimas.

"En estos hechos, el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad" (Página web del Copinh, 17 de septiembre de 2018).

El juicio del caso Berta Cáceres no se llevó a cabo al considerar la inoperancia y sesgo del ministerio público, lo que llevó a los abogados de este caso, miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj), a presentar una acción de recusación contra el tribunal de sentencia, lo que significa un rechazo al accionar de esta institución aliada del gobierno.

Organizarnos ante tanta injusticia y corrupción

Desde el Partido Socialista Centroamericano exhortamos a todos los jóvenes a organizarse, a discutir tanto la política nacional, como la centroamericana e internacional. La corrupción, es su faceta más obscena y descarnada, a llevado al hartazgo a los guatemaltecos, y las mismas razones tienen los jóvenes nicaraguenses que aún siguen luchando. En Honduras es momento de prepararnos para hacerles frente a los corruptos representantes de bancos y del mismísimo gobierno.





¡ABAJO EL “COMBO FISCAL”! : ¡QUE RENUNCIE CARLOS ALVARADO Y SU GOBIERNO!

La democracia costarricense está en crisis. El “Estado de Bienestar”, impuesto después de la revolución de 1948, ha sido desmantelado paulatinamente por décadas de ajuste neoliberal. El país lejos de avanzar y consolidar sus anteriores y confortables índices del nivel de vida, retrocede de manera alarmante.

El irresoluto problema de la deuda pública y el déficit fiscal

La deuda pública, sea interna y externa, es del 48% del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit fiscal fue del 6,2% en el año 2017. La deuda pública del gobierno central era del 25% del PIB en el año 2008 y se incrementó en 23% más en términos de 9 años. Del conjunto de esa deuda, la mayor parte corresponde a la deuda interna. De este tipo de deuda, el 44% corresponde a acreedores del sector privado y 5% a los bancos privados, es decir que el 49% es deuda del gobierno con el sector privado. El otro 51% de dicha deuda corresponde al sector público no financiero (CCSS, RECOPE y otros), a los bancos públicos, al sector financiero no bancario (INS, pensiones del poder judicial y otros), resto del sector público, financieras, mutuales, cooperativas y otras.

Es importante destacar que la carga tributaria en Costa Rica es baja (13,2% del PIB). Por su parte los impuestos directos constituyen apenas el 35,9 % del total de impuesto y el otro 64% corresponde a impuestos indirectos. Por otro lado, los impuestos sobre la renta y utilidades son bien bajos, apenas constituyen un 4,5% del PIB, mientras que en los países de la OCDE son de casi el 12%. Asimismo, es necesario mencionar que de aprobarse el paquetazo fiscal los porcentajes de los impuestos indirectos, ya sea al consumo y otros, se incrementarán haciendo pagar aún más a los trabajadores, sectores populares y sectores de clases medias, no así a los ricos y superricos.

El aumento de la deuda del 25% al 48% del PIB, en términos de nueve años, ha conllevado al incremento del déficit fiscal porque una gran parte el presupuesto de la República se ha venido financiando mediante dicha deuda. Este incremento de la deuda es el producto de los bajos ingresos fiscales por la gran evasión fiscal, las grandes exoneraciones fiscales, los bajos impuestos sobre la renta

y las utilidades y las desgravaciones arancelarias, producto del TLC.

La histórica lucha contra el Combo del ICE

Durante tres semanas, del 16 marzo al 4 de abril del 2000 los trabajadores y las masas populares de Costa Rica desarrollaron las históricas movilizaciones contra el proyecto de ley conocido como el “Combo del ICE”, que pretendió privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Estas jornadas fueron casi una insurrección popular. Al final, para contener la dinámica de la lucha, la Sala Constitucional, mediante el fallo No. 00-03220, del 18 de abril del año 2000, declaró inconstitucional el Combo del ICE.

Las luchas de resistencia

En los últimos años, los trabajadores costarricenses han librado numerosas batallas contra el ajuste neoliberal, y contra varios intentos de los gobiernos de turno, para solucionar la crisis fiscal a costa de las conquistas laborales.

En abril del 2016, se produjo una importante huelga de empleados públicos, que tienen como vanguardia al magisterio y al sector salud. En julio del 2017, los trabajadores del poder judicial se fueron a huelga general en defensa de sus pensiones.

El proyecto de Ley No 19.923: fallido intento para solucionar la crisis fiscal

En el año 2016, fue introducido en la Asamblea Legislativa el denominado proyecto de Ley No 19.923, o “ley para racionalizar el gasto público”, una fusión de varios otros proyectos de leyes, que perseguían el mismo objetivo de terminar con el déficit fiscal, a costa de las conquistas salariales y laborales: reducción y eliminación de los componentes salariales para los empleados del sector público (reducción del derecho de cesantía, limitaciones a la dedicación exclusiva, reducciones en el régimen de disponibilidad, aplicación de reglas de responsabilidad fiscal que permitirá despidos masivos contra los empleados públicos, etc.).

El impopular gobierno de Carlos Alvarado: un accidente de la historia

Una de las primeras decisiones

en materia económica, fue impulsar el proyecto de Ley No 20.580, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, expediente, mejor conocido popularmente como “Combo Fiscal”.

El gobierno de Carlos Alvarado tomo posesión en mayo del año 2018 y en cuatro cortos meses, septiembre de 2018, se ha convertido en un gobierno impopular, el cual se ha desprestigiado y perdido el apoyo de los grandes sectores por los cuales ganó las elecciones, perdiendo su base social de sustento. No les ha cumplido cuestiones de derechos a los sectores que lo llevaron al poder, tales son los casos del sector LGBTI, al sector de las mujeres y otros. Por otra parte, hay que destacar que Alvarado logró ganar las elecciones por los votos prestados de los partidarios de otros partidos frente al peligro de que ganara la contienda electoral, el evangélico Fabricio Alvarado.

Entonces, el gobierno de Carlos Alvarado solamente se sustenta en acuerdo con el PUSC y sectores neoliberales, así como con el apoyo de las cámaras empresariales y de los organismos financieros internacionales, los cuales condicionan el financiamiento futuro a la aprobación del plan fiscal. Ningún gobierno, en los últimos 20 años, se había desprestigiado, desgastado y era tan odiado en poco tiempo, como el gobierno de Carlos Alvarado. A pesar de esa situación el gobierno de Carlos Alvarado prefiere su matrimonio con el PUSC, los sectores neoliberales, las cámaras empresariales y los organismos financieros internacionales, rechazando cualquier concesión, por mínima que sea, a los sectores de los trabajadores, populares y de clases medias. De aquí se concluye que la huelga indefinida en curso constituye un pulso decisivo y determinante para el gobierno de Alvarado y, por consecuencia, de las organizaciones sindicales. Este gobierno impopular apuesta a derrotar a los trabajadores organizados en los distintos sindicatos del sector público.

El estallido de la Huelga General Indefinida

Retomando las tradiciones y experiencias de la lucha contra el Combo del ICE, las diferentes centrales sindicales, sindicatos y bloques sindicales, superaron sus diferencias y decidieron establecer la unidad de acción, creando la Unidad Sindical que convocó a una Huelga General



Indefinida a partir del día lunes 10 de septiembre.

La huelga general arrancó con fuerza arrolladora en la fecha programada, estremeciendo no solo a Costa Rica, sino al conjunto de Centroamérica. A diferencia de otras huelgas, la presente huelga indefinida cuenta con el apoyo popular del 80% al 95% del conjunto de la población. Esto último, se debe a que ésta, además de luchar contra la reducción, congelamiento y eliminación de los componentes salariales de los empleados públicos, se opone al impuesto a los productos de la canasta básica, a los servicios básicos del agua y la luz, a los medicamentos, a la medicina privada y a muchos otros servicios. Es importante mencionar que el gobierno pretende imponer ese plan fiscal para financiar una pequeña parte del alto déficit fiscal acumulado.

Día con día, la huelga indefinida se ha venido fortaleciendo, cada vez más, con mayor participación de trabajadores, tanto a nivel regionalizado como a nivel nacional. El pico más alto del movimiento huelguístico se alcanzó el miércoles 12 de septiembre, cuando en la marcha nacional se movilizaron unas 500 mil personas de todo el territorio nacional.

La represión policial contra los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), violentó la autonomía universitaria y provocó una ola de indignación general que hizo que el movimiento estudiantil cerrara filas junto a los trabajadores, contra el gobierno.

¿Hacia Dónde Va el Gobierno de Carlos Alvarado?

Aunque en apariencia el gobierno de Carlos Alvarado es "democrático", sin embargo, dada su profunda debilidad en los sectores de masas, tiende a apoyarse, cada vez más, en los neoliberales y las fuerzas policiales. En corto tiempo, el gobierno de Alvarado ha violado en dos ocasiones la Constitución Política. La primera violación se produjo cuando la ministra de Hacienda, con el aval del presidente de la República, pagó 182.000 millones de colones de la deuda pública, sin la autorización de la Asamblea Legislativa, lo cual prohíbe la Constitución Política. La segunda violación se realizó el día 12 de septiembre en contra de la autonomía universitaria cuando fuerzas policiales invadieron el campus universitario de la UCR, en persecución de estudiantes que protestaban contra el combo fiscal.

El gobierno de Carlos Alvarado con tal de cumplir sus acuerdos

económicos neoliberales con el PUSC, de cumplirle a las cámaras empresariales y obedecerles a los organismos financieros internacionales y las calificadoras de riesgos, está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluida la violación a la Constitución de la República. Alvarado se ha vuelto, igual que los neoliberales de la Asamblea Legislativa, inmune, sordo y ciego a las presiones sociales de distintos sectores. Igual está haciendo con las grandes movilizaciones que realiza el movimiento sindical en el proceso huelguístico.

Entonces, nos encontramos frente a una nueva situación y escenario social y político con este gobierno



de Alvarado, totalmente distinto. Un gobierno presidencialista de carácter bonapartista, dispuesto a golpear y derrotar al movimiento de los trabajadores y sus organizaciones sindicales para debilitarlos y poder continuar con las aplicaciones de sus planes de desmantelamiento del Estado. De aquí que es necesario y urgente que las dirigencias de la alianza denominada "Unidad Sindical" saquen conclusiones y las consecuencias de que la actual huelga indefinida contra el gobierno requiere del impulso y desarrollo de acciones más combativas, una mejor organización y centralización, que puedan frenar y derrotar los planes de este gobierno impopular.

Es urgente fortalecer la Huelga General Indefinida

El gobierno de Carlos Alvarado y los grupos económicos que lo apoyan, esperan cansar a los trabajadores y llevarlos a un callejón cuya única salida sería la aprobación parcial o total del proyecto de Ley No 20.580.

Por ello debemos fortalecer la Huelga General creando comités en las fábricas y en cada centro de trabajo o comunidad, de manera que participe la mayor cantidad de personas, para tener control de la lucha y de las

negociaciones.

No se debe levantar la Huelga General bajo el engaño y las promesas del gobierno. Ninguna decisión se debe tomar hasta que las bases decidan democráticamente el camino a seguir.

¡Que renuncie Carlos Alvarado y su gobierno!

Toda Huelga General plantea el problema de quien debe gobernar. En los hechos, los trabajadores y los sectores populares han paralizado el país, demostrando una enorme fuerza transformadora. Sin habérselo propuesto, los trabajadores están demostrando que ellos son quienes deben gobernar en Costa Rica.

El gobierno de Carlos Alvarado ha traicionado el mandato de sus electores, por ello debe renunciar de manera irrevocable junto con todos sus ministros. ¿Quiénes debe asumir el gobierno? Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) planteamos que, ante una posible renuncia del gobierno de Carlos Alvarado, el gobierno debe ser asumido por Movimiento Unitario Sindical Costarricense, que son los organismos que dirigen la actual Huelga General.

Ha llegado la hora de que la sociedad costarricense resuelva los grandes problemas que los diferentes gobiernos no han podido hacer. Llamamos a no confiar en los partidos como el PAC, PUSC, PLN, PRN y demás, porque todos pretenden resolver el problema de la crisis fiscal, en detrimento de la clase trabajadora y los sectores populares.

La solución al déficit fiscal, no pasa por arrancar las escuálidas conquistas salariales y laborales a los trabajadores, sino porque las empresas y grupos económicos paguen más impuestos, conforme a sus ganancias.

Es hora de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en donde la mayoría de la población, de manera democrática, decida como reorganizar las instituciones del Estado y como resolver el cáncer del déficit fiscal, que solo ha servido para engordar los bolsillos de las grandes empresas.

Centroamérica, 14 de septiembre del 2018

Secretariado Ejecutivo
Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano
(SECA) ■



ADELANTE CON LA HUELGA INDEFINIDA: LAS NEGOCIACIONES DEBEN SER PÚBLICAS

Por José René Tamariz

El desarrollo de la huelga indefinida iniciada el 10 de septiembre y que inicia su tercera semana se puede caracterizar como un proceso de lucha de resistencia y defensivo contra las pretensiones del gobierno y del conjunto de las fuerzas neoliberales y patronales de reducir los niveles de los salarios y de vida y del empleo de los trabajadores en general y, en particular a los trabajadores del sector público, sectores populares y de clase medias. Las fuerzas de la reacción quieren imponer, mediante la aprobación del combo fiscal, el pago del déficit fiscal al conjunto de los trabajadores, sectores populares y clases medias.

En este verdadero y agudo proceso de confrontación social se están midiendo las fuerzas antagónicas de la lucha de clases. La fortaleza del movimiento de masas reside en su masividad, en la unidad nacional de las organizaciones sindicales (sindicatos, centrales sindicales, bloques sindicales, asociaciones y otras) y en la justeza de sus demandas económicas y sociales. Por su parte, las fuerzas reaccionarias (gobierno, partidos neoliberales, cámaras patronales, medios de comunicación y otras), minoritarias en su número, son fuerte por el control del aparato del Estado, recursos económicos y las campañas de desinformación, pero, principalmente, por el control de las fuerzas represivas.

Correlación de Fuerzas y Proceso de Negociación

La huelga indefinida alcanzó su máximo pico el miércoles 12 de septiembre con la gran movilización nacional que pudo llegar hasta unos 500 mil movilizados. En esta tercera semana que se desarrolla la huelga, nuevos sectores comienzan a sumarse al movimiento como son los estudiantes de las universidades públicas de la UNA y FEUCR. Sin embargo, para

que la huelga se fortalezca y alcance su triunfo necesita incorporar a otros sectores laborales y populares.

Si tuviéramos que definir el actual momento del movimiento huelguístico sería como un de un impasse en donde ninguna de las dos grandes fuerzas en contienda, la Unidad Sindical y Social y el Gobierno y jauría neoliberal, logran imponer sus posiciones y ganar, por la vía legal o de hecho, el pulso en el proceso de lucha o reaccionario. En este marco se producen el proceso de negociaciones entre el gobierno y los representantes del movimiento sindical. La política del gobierno es, por un lado, dar la apariencia pública de que está dispuesto a negociar, pero, por el otro lado, reprime violentamente a los huelguistas. Es decir, es una política de la zanahoria y el garrote. Además, en conjunto con los medios de comunicación, pretenden acusar y penalizar a los huelguistas de una serie de hechos que se producen, tales como el sabotaje al oleoducto de combustible de RECOPE.

El movimiento sindical plantea el retiro del expediente 20.580 o combo fiscal, mientras tanto la posición del gobierno es que no lo puede retirar debido es el punto para iniciar la supuesta solución al déficit fiscal. Sin embargo, consideramos que una condición para iniciar el proceso de negociación, el sector magisterial, con el apoyo de los demás sindicatos, debe plantear la derogatoria inmediata de las directrices administrativas que reducen, congelan y eliminan los componentes salariales de los trabajadores del gobierno central. Se debe, asimismo, poner en la mesa de negociación el proyecto de ley que pretende imponer un régimen único de pensiones, eliminando, por ejemplo, la junta de pensiones del magisterio nacional como administrador de ese régimen.

Sobre la Declaratoria de Ilegalidad de la Huelga indefinida

en el CNP, Ministerio de Vivienda y Otros Sectores Laborales

La primera maniobra política del gobierno de Carlos Alvarado para declarar ilegal la huelga indefinida en el Consejo Nacional de Producción (CNP) se produjo el viernes 21 de septiembre en la tarde con el objetivo de crear confusión y bajar la moral a los huelguistas. Sin embargo, esa declaratoria, lejos de desanimar a los luchadores, les ha producido enojo porque es una declaratoria eminentemente de carácter político, amañada, que está siendo rebatida de forma contundente por los abogados del movimiento sindical.

La declaratoria de ilegalidad de la huelga de los compañeros del CNP por parte del juez, Arnoldo Álvarez Desanti, hermano del explotador burgués de trabajadores de fincas bananeras, Toño Álvarez Desanti, plantea en uno de sus fundamentos que "Es un movimiento a nivel nacional, que reprocha un proyecto de legislación, y esto no está incluido dentro de la relación obrero patronal. Es imposible que el CNP agrade a sus trabajadores, aún cuando estando de acuerdo, ya que la institución no puede obligar al Ejecutivo, ni a la Asamblea, de legislar de una manera u otra, o de proponer leyes de distinto tipo". Sin embargo, el artículo 371 del código de trabajo, reformado, señala que una de las causales de huelga es: "a) La defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales". Por tanto, la presente huelga indefinida contra el proyecto de "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" tiene como objetivo central "la defensa... de sus intereses económicos y sociales", ya que se pretende defender los componentes salariales que quieren ser reducidos, congelados y eliminado por dicho proyecto de ley. Además, el patrono de los trabajadores del CNP, como institución estatal, es el Estado. Los patronos no son los jefes del CNP, ya que ellos solamente son los



representantes del patrono, no los dueños.

Por otro lado, la declaratoria de ilegalidad de la huelga indefinida en el Ministerio de Vivienda, aunque el juez reconoce que se cumplieron con casi todos los puntos, sin embargo, la declara ilegal porque no cumplió con el requisito del 50% de los trabajadores participantes. Según el juez, solamente hay 4 trabajadores en huelga. Es obvio que, si solamente 4 compañeros participan de la huelga, constituye un grave error de la dirección sindical de ese ministerio haber lanzado la huelga en esas condiciones de poco apoyo. Lo importante, en cierto modo de esa declaratoria, es que no tiene carácter político como es el caso del CNP, ya que no plantea que no se puede hacer la huelga en una institución del gobierno central contra el proyecto de ley del combo fiscal porque

ese aspecto "no está incluido dentro de la relación obrero patronal". Esta declaratoria, entonces, contradice y se contraponen a la primera.

Mientras tanto, los juzgados de trabajo continúan realizando el proceso para la calificación de la huelga en distintos sectores, tales como educación, salud, judicial y otros, para un total de más 31 instituciones públicas. En el caso del sector educativo, las inspecciones de trabajo realizadas hasta el momento indican que los porcentajes de participación en la huelga son altos de hasta un 93% o más, lo cual puede favorecer una declaratoria de legalidad. Sin embargo, hay sectores reaccionarios que están demandando la criminalización del movimiento huelguístico a través de la fiscalía. Es decir, que podemos esperar cualquier sorpresa en este terreno para inducir a una eventual declaratoria de ilegalidad del proceso huelguístico.

Debido a todas las maniobras anteriores es necesario e indispensable avanzar hacia un mayor fortalecimiento de la huelga.

El poder Ejecutivo, según informaciones que se han filtrado, ha presionado a los jueces de trabajo para que declaren ilegal la huelga en los distintos sectores. Mientras ese proceso sigue su curso, el cual tiene el propósito de crear temor y confusión entre los huelguistas para debilitar el proceso huelguístico indefinido, éste se mantiene fuerte. El gobierno de Alvarado está tratando de entretener



y engañar a las dirigencias sindicales de la Unidad Sindical y Social, dando la apariencia de estar "negociando" cuando en realidad no se está negociando nada. Las pláticas no han pasado de ser preliminares. Nos están vacilando y ganando tiempo, mientras tanto el proyecto de ley del combo fiscal sigue su curso normal en la Asamblea Legislativa. El gobierno no quiere ni va a retirar el expediente 20.580 porque con ese proyecto se está jugando el futuro de su gobierno, entonces la única vía para imponer la posición sindical es aumentando los niveles de las acciones y movimientos callejeros. Por tanto, se requiere de forma urgente y necesaria fortalecer el movimiento huelguístico, incorporando nuevos sectores sociales y fuerzas frescas, así como generalizar los comités de huelga en cada centro de trabajo y llevar las movilizaciones, la propaganda y la explicación de por qué luchamos contra el combo fiscal, en las

comunidades y barrios populares para movilizarlos contra el mismo.

Negociaciones deben ser públicas

Las negociaciones entre las dirigencias de la Unidad Sindical y Social y el Gobierno deben ser públicas sin ningún tipo de secretismos. Las dirigencias sindicales están obligadas a informar, después de cada sesión de negociación, a las bases cuales fueron las propuestas del gobierno y contrapropuestas nuestras para hacer transparentes estos procesos. Son las bases de los sindicatos las que sostenemos este gran movimiento y merecemos respeto, estar informados y también decidir el rumbo no sólo de las acciones de lucha sino también del proceso de negociaciones.

Por El Fortalecimiento de la Huelga General Indefinida

El gobierno de Carlos Alvarado y los grupos económicos que lo apoyan, esperan cansar a los trabajadores, tal como lo planteo el expresidario y expresidente Miguel Ángel Rodríguez en un audio reciente, además, insta al

gobierno a no pagar los salarios a los huelguistas. Sin embargo, sabemos que esto último el gobierno no lo puede hacer con la nueva reforma procesal laboral.

Por ello debemos fortalecer la Huelga Indefinida, incorporando nuevos sectores sociales al proceso huelguístico, tales como estudiantes, comunidades y otros sectores productivos; formando y generalizando los comités de huelga o de lucha en cada regional, comunidad y centros de trabajo, de manera que participe la mayor cantidad de luchadores; realización de asambleas democráticas en donde se discuta y voten las nuevas acciones y actividades para tener control de la lucha y de las negociaciones. Es urgente cambiar las estrategias que pueden desgastar las energías de los huelguistas, por eso es necesario y urgente tomar en cuenta las sugerencias que se plantean en las bases movilizadas. ■

LA LUCHA ANUAL POR EL PAGO DEL ESCALAFÓN

Por Juan José Martínez

La salud es un derecho humano fundamental que el Estado salvadoreño está en la obligación garantizar al pueblo. Si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos por mejorar la atención médico hospitalaria, estos han sido insuficientes, la población todavía no goza de una atención médico hospitalaria oportuna y eficaz, así como de tratamientos adecuados para aquellas enfermedades que requerían una atención de especialistas. Periódicamente los trabajadores de salud junto a sus organizaciones hacen denuncias públicas de la falta de medicamentos, insumos, equipo, etc., en los diferentes centros de atención.

El trabajador de salud es pieza fundamental en la atención médica hospitalaria, quien por su misma profesión se ve expuesto a diferentes riesgos laborales, la inversión del gobierno en materia de salud no ha sido de acorde a la demanda llegando al caso de eliminar unos de los principales incentivos como era el escalafón el cual había sido logrado producto de las luchas.

Defensa del escalafón y maniobras de las autoridades

El gobierno del FMLN como parte de las políticas de austeridad y de los dictados de organismos financieros internacionales busco eliminar de un plumazo para todos los trabajadores el incentivo del escalafón, lo anterior llevo a la organización y movilización de los trabajadores de salud.

Para el 2019 los trabajadores han vuelto a la lucha para que se cumpla la Ley del escalafón como una medida para contener la lucha la ministra de salud Violeta Menjívar lanzo una propuesta inicial de aumento del

escalafón del "...2 %, para los que reciban salarios de \$2,001 hasta \$3 mil; 4 % para los que reciban como pago de \$1,001 hasta \$2000; y 5 % para los que tengan un salario de \$1 hasta \$1000." (16/06/2018). Esta propuesta fue rechazada por los trabajadores quienes nuevamente han vuelto a lucha lo que ha llevado a la ministra a realizar adecuaciones tácticas a su propuesta inicial proponiendo esta vez un aumento del 8, 4 y 2 por ciento.



Representantes sindicales difieren respecto a última propuesta

Según la última propuesta del ministra "...11,906 empleados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Minsal) que devengan actualmente hasta \$1,000 de salario recibirán el 8% de incremento...otros 10,906 trabajadores que tienen sueldos de entre \$ 1,000 y \$ 2,000 tendrán el 4% de alza; mientras que 2,127 que reciben salarios que van de \$ 2,001 a \$ 3,000 tendrán 2 % de mejora...488 personas que ganan arriba de \$3,000 no recibirán incremento..."(EDH. 17/09/2018).

Respecto a esta última propuesta la ministra manifestó: "Como ministerio de Salud nos sentimos muy complacidos. Han sido largas coordinaciones con el ministro de Hacienda. Nos hemos reunido con quince sindicatos y

asociaciones que trabajan dentro del ministerio" (17/09/2018).

De igual manera Mario Arévalo, secretario general del SIGESAL manifestó...que están satisfechos en forma parcial con la nueva propuesta, porque si bien favorece a los trabajadores que tienen salarios abajo de los mil dólares, aún se tiene que mejorar los que ganan de mil a dos mil dólares. Por su parte Álex Carballo, secretario general de Sindicato del Hospital Bloom agradeció al gobierno.

Por la otra parte Silvia Navarrete secretaria general de SITRASALUD, manifestó que "... que los porcentajes del incremento son inconsultos y no se apegan a la ley...no es el mejor acuerdo y además denuncia que este tiene arbitrariedades que afectan al sindicato por parte de las autoridades de salud...que a los trabajadores de salud les han eliminado

prestaciones como la alimentación también manifiesta que no les están entregando las cuotas sindicales que por ley les corresponden..."(<http://102nueve.com/2018/09/24/>).

Ninguna confianza en los partidos del régimen

La nueva propuesta favorece a un buen porcentaje de trabajadores, pero no está cumpliéndose según la Ley. No se debe confiar en el gobierno y en ningún partido del régimen. Si bien la nueva propuesta obedece a la presión de los trabajadores también es una forma mediante la cual el gobierno busca congraciarse dado a que se está en un periodo preelectoral. Todos los trabajadores y organizaciones deben unificarse para exigir el pago del escalafón según la ley e exigir mayores incentivos.

